

Globethics Repository



Limitada por la guerra; pendiente a futuro
[Limited by the war; pending future]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Serra, Luis
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-12 06:33:33
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220946

Limitada por la guerra; pendiente a futuro. Participación y organización popular en Nicaragua

Serra, Luis

Luis Serra: Historiador y abogado argentino, residente en Nicaragua desde 1979. Es profesor en la Universidad Centroamericana y editor del periódico de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG).

Este artículo analiza críticamente el desarrollo de la participación popular, a través de sus organizaciones de masas, en la primera década de la revolución sandinista, tratando de establecer sus distintas etapas hasta el presente, y de señalar sus principales limitaciones y logros. Una visión retrospectiva de la evolución de la participación popular durante la primera década, nos ofrece cuatro etapas con características propias, aunque haya existido una continuidad basada en los principios fundadores de las organizaciones populares (OP) y en su vinculación con el FSLN. Si bien las OP se habían manifestado de forma embrionaria en las décadas anteriores, especialmente los sindicatos, fue al calor del auge insurreccional, iniciado a fines de 1977, que se constituyeron las principales OP. Es decir, que la trayectoria histórica de las OP ha sido breve y su impulso mayor ha provenido del FSLN. Posteriormente, la guerra y otras circunstancias, impusieron otro rumbo.

En el Movimiento Pueblo Unido (MPU), constituido por el FSLN en junio de 1978, confluyeron más de veinte organizaciones estudiantiles, laborales, cívicas, de mujeres, y partidos políticos de izquierda. En esta primera fase de rápida expansión, las OP se caracterizaban por su amplitud, pluralismo y flexibilidad organizativa, en torno a un objetivo común: el derrocamiento de la dictadura. Las OP se fueron constituyendo en las nuevas estructuras de poder popular, y trataban de resolver los problemas básicos que enfrentaba la población en aquella situación de guerra.

El 19 de julio de 1979 se derrumba el viejo aparato estatal y son las OP quienes asumen directamente las funciones básicas de organización y dirección social, mientras la Junta de Gobierno y la Dirección del FSLN tratan de ubicarse en su nuevo rol y orientar el proceso de reconstrucción nacional, con un Estado desarticulado y un partido recién reunificado. Por ejemplo, los campesinos y obreros agrícolas, organizados en ATC, asumieron la autogestión de las haciendas confiscadas al somocismo y la formación de cooperativas rurales; los CDS se constituyeron en las autoridades locales que regulaban la vida de la población.

En esta etapa las OP sandinistas fueron concebidas como instituciones de defensa del proyecto revolucionario y como canales de participación y resolución de las demandas populares. Mientras que los partidos políticos languidecían como organizaciones representativas de distintos intereses sociales, las OP se perfilaban como los principales canales democráticos de un sistema político en construcción.

En esta fase la Dirección del FSLN recalcó la autonomía relativa de las OP, al reconocerles el derecho de luchar por todos los medios posibles para lograr sus reivindicaciones propias.

En la práctica, la autonomía de las OP, entendida como el grado de control sobre la fijación de metas y la toma de decisiones, estaba en dependencia de la correlación de fuerzas entre los sectores populares y los sectores burgueses, y de la actitud del FSLN, que asumió el rol de árbitro en los conflictos de clases, para evitar la ruptura del proyecto de unidad nacional, economía mixta y no-alineamiento. Un arbitraje activo como lo demostraron las medidas coercitivas tomadas, tanto contra la ultraderecha como contra la ultraizquierda, en aras de la unidad nacional, donde las OP sandinistas jugaron un papel importante.

Creemos que esta primera fase fue un período de gran autonomía de las OP, tal como se demostró en la lucha combativa de los sectores populares en defensa de sus intereses específicos. Esto se realizó de forma directa y a través de sus representantes en el máximo órgano legislativo, quienes sumaban un 44% del total del Consejo de Estado.

Un ejemplo notorio fueron las movilizaciones impulsadas por la Coordinadora Sindical de Nicaragua - formada a fines de 1980 con la ATC, CST, FO, CAUS, CUS y CGTi¹ - en contra de la descapitalización en empresas privadas o estatales, inclu-

¹El Frente Obrero (FO) es una corriente sindical de izquierda ligada al partido Movimiento de Acción Popular (MAP) desprendido del FSLN en los 70. La Confederación de Acción y Unidad Sindical (CAUS) depende del Partido Comunista. La Confederación General de Trabajadores Indepen-

yendo huelgas y tomas de empresas, hasta lograr la aprobación de una severa ley contra la fuga de capitales (agosto 1981). Otro ejemplo fue el proceso asambleario campesino, que rápidamente aglutinó a pequeños y medianos productores en la UNAG, a fin de impulsar una reforma agraria que responda a sus intereses, en especial el derecho a la tierra recogido en la Ley de Reforma Agraria (julio 1981), logrando modificar parcialmente el énfasis estatizante impuesto por el MIDINRA desde 1979.

Sin embargo, el gobierno prohibió el recurso popular a las vías de hecho para lograr sus reivindicaciones y luego estableció el Estado de Emergencia (septiembre 1981) suspendiendo los derechos de huelga, toma de empresas y movilización, a causa de la ofensiva contrarrevolucionaria. Así, la guerra de agresión imperialista abre una nueva fase en el desarrollo de las OP.

La institucionalización (1982-1985)

En esta segunda fase, la dinámica de los movimientos sociales de jóvenes, mujeres, pobladores, campesinos y obreros, pasó a cristalizarse en organizaciones permanentes y complejas, dentro de un contexto de guerra y del fortalecimiento de los aparatos estatal y partidario.

Los movimientos sociales se institucionalizaron mediante la adopción de estatutos que normaron los distintos aspectos de su organización, al mismo tiempo que el sistema político establecía las reglas de juego de su participación. El trabajo de encuadrar los movimientos populares dentro de los esquemas normativos diseñados en los estatutos, se constituyó en una ardua y prolongada tarea. En esta fase se eligieron o nombraron formalmente los representantes populares, que pasan a profesionalizarse como gestores de los intereses del movimiento. Se establecieron los locales, los emblemas, las celebraciones de gestas pasadas, los héroes, las consignas, himnos y todos los demás rituales propios de la institucionalización.

Aparecieron entonces las primeras críticas de las bases al burocratismo dentro de sus OP, lo cual se convirtió en un fenómeno recurrente, que trataba de evitar los abusos de poder y elegir nuevos dirigentes. Estos «procesos asamblearios» periódicos han sido, por un lado, una muestra de la intención democrática de algunos dirigentes, y por el otro, una prueba de la reproducción de los mismos problemas. Por ejemplo, en los CDS hubo un proceso electoral en 1982, luego de una crítica pú-

dientes se vincula al Partido Socialista. La Confederación de Unidad Sindical (CUS) está integrada a la coordinadora de organizaciones opositoras de derecha.

blica del Cte. Bayardo Arce contra los abusos de poder, en 1985 hubo otro proceso eleccionario similar y otro, recientemente, en 1988.

En esta fase, el aparato estatal se expandió desordenadamente, retomando las funciones que habían asumido inicialmente las OP, subordinándolas a un papel consultivo y proveedor de mano de obra voluntaria para sus proyectos. La regionalización (1982) facilitó la descentralización del aparato estatal, pero poco avanzó en la participación de las OP en las decisiones gubernamentales, inclusive en sectores como el campesinado hubo una gran resistencia a las nuevas divisiones administrativas, que obedecían a una lógica de planificación ajena a las tradiciones culturales del campo.

Paralelamente, el FSLN se consolidó orgánicamente y se expandió, en gran medida con cuadros de las OP, disminuyendo la autonomía relativa concedida en la primera fase a las OP, en aras de la construcción partidaria.

La unidad de esfuerzos y de mandos que reclamaba la defensa militar del país implicó el encuadramiento de las OP dentro de los planes bélicos. Lo cual no disminuyó en un inicio la participación popular (ej. Milicias Populares, Vigilancia, Defensa Civil); sin embargo, al priorizarse el servicio militar obligatorio (1983) como forma de defensa, convirtiéndose las OP en canales de reclutamiento, cambió la situación, especialmente cuando se utilizaba la coerción en las levas, sin persuasión previa. Gran parte de los dirigentes y afiliados de las OP se vieron absorbidos en la defensa; por ej., un 47% de los afiliados a la CST, y un 30% de obreros de ATC, para fines de 1984.

En 1984 se resucitan los minúsculos partidos políticos tradicionales para la competencia electoral de noviembre, lo cual significó una pérdida parcial de las OP como canales de participación democrática. Las OP sandinistas se pusieron en función de la campaña por el FSLN, reforzando así el cordón umbilical con su partido fundador. La nueva Asamblea Legislativa no tendría representación directa de las OP, sino a través de un partido político. La nueva Constitución sacralizó la prioridad de los partidos políticos sobre las OP, en un sistema político que trataba de combinar la democracia representativa con la llamada democracia participativa.

El descenso de las OP (1985-1988)

El hito que inicia esta tercera fase lo constituyen las medidas económicas (1985) que trataron de enfrentar la crítica situación derivada de la guerra, el boicot comer-

cial y financiero, el deterioro de los términos de intercambio con el mercado mundial, y los errores en las políticas gubernamentales.

Las medidas de ajuste y estabilización en 1988 continúan las de 1985 con un énfasis monetarista que trataba de atacar la inflación, la pérdida cambiaria y el déficit fiscal, mientras se promovía la rentabilidad empresarial y las exportaciones. Esta política económica de sobrevivencia significó la liberalización de precios y canales de comercialización, la eliminación de subsidios al consumo de productos básicos, la flexibilización de los salarios, la reducción del gasto fiscal priorizando la defensa, la educación y la salud.

Para los sectores populares, estas medidas han traído una caída drástica de sus ingresos familiares, llegando en muchos casos al límite de la sobrevivencia física, por ej. el salario básico del obrero agrícola, en febrero de 1988, cubría el 100% de una canasta básica de ocho productos, pero en junio se redujo a un 60% y en julio a un 16%.

Todo ello implicó para las OP una reducción de su capacidad de satisfacer las reivindicaciones materiales de sus sectores y de movilizar a sus afiliados, quienes se vieron absorbidos en la lucha cotidiana por la sobrevivencia familiar. Se sentía un repliegue del espíritu de solidaridad y cooperación de los primeros años, al mismo tiempo que afloraba una cruda competencia entre distintos sectores sociales por los escasos recursos existentes. En esta situación crítica, las OP se hallaron en un fuego cruzado entre la presión de sus bases por reivindicaciones mínimas, y la presión del gobierno, para impulsar el trabajo voluntario, la defensa, la austeridad y la reducción de la fuerza de trabajo. Lógicamente que en este contexto la participación en las OP disminuyó sensiblemente, a excepción de la UNAG, donde ha habido una expansión entre los medianos productores a través de comisiones y asociaciones por rubro, así como el avance organizativo provocado por las Tiendas Campesinas.

Hay que destacar el proceso de descomposición del proletariado y del campesinado como producto de la guerra y la crisis económica, que afectó la base social de las OP. Unas 350.000 familias campesinas se desplazaron del teatro de guerra hacia zonas de relativa paz, ya sea en nuevos asentamientos y en la periferia de las ciudades, engrosando el sector informal. Por otro lado, el cierre de empresas y la caída del salario real de los obreros, empujó al proletariado al sector de servicios.

En síntesis, la acumulación de las tendencias de la fase anterior - subordinación de OP al Estado y al partido en un contexto de guerra - con la agudización de la crisis económica, ha conducido a un claro descenso del movimiento popular en estos años.

El desafío de la reactivación (1988-?)

La derrota militar y política del proyecto contrarrevolucionario, las negociaciones entre el gobierno y la cúpula Contra, el cambio presidencial en EEUU, sumado a los esfuerzos de la comunidad internacional por la paz en Centroamérica, abrieron una nueva coyuntura en 1988 que influyó positivamente en la participación popular. De igual modo, el estancamiento de las OP motivó al FSLN a revisar esa situación a fin de reactivar el movimiento popular.

En esta cuarta fase, se reconoció que en las OP predominaba un estilo de conducción vertical, propio de la guerra, que era necesario modificar, al igual que la renovación de dirigentes a través de elecciones. Por ejemplo, los CDS tuvieron elecciones a nivel nacional, renovaron sus dirigentes, y realizaron un proceso asambleario para discutir sus problemas y plantear un nuevo enfoque: un movimiento comunal pluralista dedicado a promover la participación popular en la mejora de las condiciones de vida en los barrios. La estructura organizativa se flexibilizó en las bases, pudiendo adoptar distintas modalidades - Comisión de Vecinos, Comité de Desarrollo Comunal, etc. -, y tratando de incorporar a los líderes naturales del lugar. La investigación participativa se retomó como un método de trabajo para promover el análisis colectivo de la problemática de la comunidad, con el fin de buscar alternativas de solución.

Igualmente la Juventud Sandinista (JS) impulsó un proceso eleccionario en todos los centros de estudio y elaboró un plan de lucha basado en las demandas recogidas en asambleas de base en todo el país. A nivel universitario, la JS ganó las elecciones con el 63% de los votos emitidos, siendo segundo los jóvenes socialcristianos con 18%.

En su 4a. Asamblea Nacional (Abril 1989) los temas más debatidos fueron la discriminación de la mujer, la escasa atención brindada a los desmovilizados del servicio militar y a los graduados en centros de estudios extranjeros, y la problemática derivada de la crisis económica y el proceso electoral. Las tareas principales definidas en dicha asamblea fueron la defensa, la lucha contra la inflación y el apoyo a la campaña electoral del FSLN. Respecto a la mujer, se decidió impulsar la educación

sexual, despenalizar el aborto, no comercializar los concursos de belleza y darles acceso a los cargos de dirección criticándose que, por ej., en el Comité Ejecutivo Nacional de la JS no había ninguna fémina. Otras tareas planteadas fueron el impulso a los deportes, la recreación y la cultura, la atención a desmovilizados y egresados, y la campaña por la niñez.

El sector prioritario del trabajo de la JS continuará siendo el estudiantado y, en segundo lugar, los barrios, según declaró su actual coordinador nacional, Ajax Delgado, quien considera que «la Juventud Sandinista debe ser una organización flexible, amplia, que integre en sus filas a los jóvenes patriotas, debe ser una organización de todos los jóvenes nicaragüenses»². Sin embargo, es difícil que un joven no identificado con el FSLN decida ingresar a una organización que trabaja en la campaña electoral de dicho partido. Esta contradicción no resuelta entre una concepción amplia y una práctica partidaria, no es exclusiva de la JS, sino que ha sido común entre las OP estudiadas.

Todas las organizaciones de masas han disminuido notablemente el número de sus promotores asalariados, que laboraban a tiempo completo en dichos organismos, con el fin de incorporar nuevos dirigentes naturales voluntarios, combatir el burocratismo y reducir los gastos. Por ejemplo, la UNAG ha reducido en un 50% sus promotores, muchos de los cuales han regresado al trabajo productivo en el campo, incorporándose en los organismos territoriales, en caso de ser electos por sus bases. Este proceso renovador permite el recambio de la dirigencia de las organizaciones populares, aunque presenta el problema de la pérdida de experiencia acumulada por esos promotores y la escasez de tiempo de los dirigentes voluntarios para las múltiples tareas que demandan las bases.

En la práctica...

La disminución de las actividades bélicas ha significado en el campo la posibilidad de reunirse y organizarse sin temor a represalias de la Contra. Muchas familias campesinas, desplazadas por la guerra a pueblos o asentamientos, regresaron a sus fincas, por ej. en Nueva Segovia, de 960 desplazados en asentamientos, sólo quedaban 240 en mayo de 1989. Igualmente, los dirigentes de las organizaciones populares, los maestros y técnicos, han podido regresar a trabajar en zonas rurales.

En este período se formaron los Comités de Paz en las zonas de guerra, con representación amplia de religiosos, dirigentes políticos y líderes naturales. Estos orga-

²Barricada, 27-3-1989.

nismos creados con el fin de promover la desmovilización de los alzados en armas y crear las condiciones de paz, se convirtieron en muchos casos en auténticos canales de participación popular para resolver distintos problemas comunales. Martín Mendoza, miembro del Comité de Paz en una zona rural de Siuna, nos explicó: «estos Comités velan por las necesidades de las comunidades, por ejemplo atendemos a los huérfanos y a las viudas de guerra, si hay que reparar la escuela, o conseguir semilla para la siembra».

En 1989 se ha reactivado el movimiento cooperativo rural, impulsado por la UNAG, con miras a consolidar su organización nacional y su participación en la gestión estatal. Luego de un proceso asambleario realizado en los 147 municipios del país, se han formado o renovado los Consejos Cooperativos a nivel de municipio o región, se han analizado los principales problemas y se ha elaborado un plan de desarrollo del movimiento, que incluye acciones económicas, organizativas y educativas. Frente a una concepción paraestatal del cooperativismo, la UNAG ha retomado las banderas de la autonomía de las cooperativas y su derecho constitucional a participar en la formulación de las políticas agropecuarias.

En la Región 1, que abarca los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia, se inició una valiosa experiencia de «Investigación Participativa» con el fin de promover el autoconocimiento de las comunidades y de impulsar la gestión popular en la mejora de sus condiciones de vida. En todas las comunidades de esta extensa y densamente poblada región, se recogió un censo socioeconómico, que fue analizado colectivamente en asambleas, con el fin de elaborar un plan de mejoras. La planificación del desarrollo regional se está realizando de abajo hacia arriba, desde las comunidades a los municipios, y de éstos a la región. Para Manuel Morales, presidente regional: «la construcción del poder popular ha sido un aprendizaje permanente y, ahora, con esta experiencia, estamos consolidando la democracia participativa».

También en el sector de las mujeres ha repuntado la participación, desde 1987, cuando el movimiento femenino desarrolló un proceso asambleario de discusión de su problemática, logrando que el FSLN emitiera una proclama reconociendo sus derechos y condenando el machismo y la discriminación contra ellas. AMNLAE se reorganizó, en función de impulsar en cada sector social el trabajo de concientización y promoción de las mujeres, creándose una sección especial en cada organización popular, e incorporando representantes femeninas en sus directivas.

A fines de 1988, AMNLAE había planteado un proceso electoral a todo nivel de sus directivas y también la elaboración de sus estatutos organizativos, sin embargo el nombramiento de un nuevo comité ejecutivo nacional por parte del FSLN (mayo 1989), el aplazamiento del proceso electoral interno, acompañado de una línea de trabajo que subordina las reivindicaciones de género a la unidad sandinista, en aras de la campaña electoral, significa un claro retroceso para el movimiento femenino.

En el campo sindical, la participación popular no ha avanzado significativamente en la actual coyuntura, debido a las políticas económicas aplicadas por el gobierno desde febrero 1988, para combatir la inflación (1.161% en 1987), disminuir el déficit fiscal (15,8% del PIB en 1987) y promover las exportaciones. Estas medidas provocaron una recesión productiva, expresada en el cierre de innumerables empresas, y el desempleo obrero, acrecentado por una drástica reducción del personal estatal. Hubo algunas movilizaciones, huelgas y acciones obreras en defensa del puesto de trabajo y de un salario mínimo, en aquellos casos donde existía una organización sindical fuerte y autónoma, o fueron acciones de base las que desbordaron a los sindicatos.

Un caso reciente (junio 1989) ha sido la huelga de maestros que ha desbordado el sindicato sandinista ANDEN, en demanda de un aumento salarial, transporte en zonas rurales, descentralización del MED y otras demandas menores, a fin de mejorar sus condiciones laborales y evitar la deserción del gremio, que sumó más del 30% del magisterio nacional en 1988. Mientras que el FSLN acusaba a la CIA y a la oposición de promover las huelgas - expulsando del país a dos miembros de la Embajada americana -, la derecha acusaba al gobierno de ser el causante de la crisis educativa. Finalmente, el gobierno llegó a un acuerdo donde se reconocieron las demandas de los maestros.

En otras huelgas se observaron los mismos fenómenos; desborde del sindicato sandinista, polarización ideológica en los medios, negociación con el gobierno. Para los trabajadores, la lección es clara: sin medidas de fuerza, las posibilidades de obtener sus demandas es mínima. Igual ha hecho la burguesía algodonera y cafetalera en 1989: amenazar con un paro productivo para obtener sus reivindicaciones.

La «compactación» o reducción del gasto en instituciones y empresas estatales, ha sido otro terreno de lucha, donde el movimiento obrero ha obtenido contados logros. En la mayoría de los casos, la compactación ha sido decidida por los directivos y ha significado un despido considerable de personal, incluyendo dirigentes

sindicales y personas «conflictivas» para la patronal. En algunos casos, como por ej. METASA, el sindicato ha participado en una revisión general de los gastos, tratando de mejorar la eficiencia productiva y reducir al mínimo los despidos. La demanda de la CST y UNE de reducir los gastos de representación y privilegios materiales de los directivos y cuadros técnicos, y de no despedir personal si no se ofrece una alternativa de empleo, sólo fue efectiva en contados casos.

Un repunte de las tomas de tierras en 1989 ha sido otra expresión de la movilización popular, que ha desbordado las OP en respuesta al deterioro de sus condiciones de vida. Particularmente en las Regiones más densamente pobladas del Pacífico (2 y 4), ha habido invasiones de tierras por parte de campesinos pobres y obreros desempleados, a veces impulsados por sindicatos opositores. El gobierno ha declarado ilegales tales tomas, buscando con UNAG y ATC una solución en caso de demandas justas.

La concertación económica promovida por el gobierno en 1989 entre empresarios, trabajadores y Estado, ha satisfecho más los intereses de los primeros que de los segundos, tal como quedó claro en el reciente encuentro (204-1989) del gobierno con productores agropecuarios, por ej., se aprobó un subsidio de 1.000.000 de córdobas por manzana a los algodóneros, pero no se concedió la demanda obrera de un salario que cubra ocho productos básicos. En un encuentro de las centrales sindicales (abril 1989) para analizar la política de concertación, se concluyó en la necesidad de mayor autonomía sindical respecto de los partidos y del Estado, además de impulsar la participación democrática del movimiento obrero y de elaborar un nuevo código laboral.

El proyecto de reforma del Código Laboral aún vigente desde 1944 que permite, por ejemplo, al empleador despedir sin causa al trabajador, es impulsado actualmente por varias centrales sindicales, pero tiene escasas perspectivas de entrar en la agenda de la Asamblea Nacional en este año, quedando pendiente al finalizar la primera década de revolución.

Reflexiones sobre la participación popular

La primera década de la revolución sandinista muestra un desarrollo indudable de la participación popular en relación al pasado somocista, pero no ha sido un proceso lineal ascendente, sino con altibajos, contradicciones y limitaciones, causadas por la guerra, la crisis económica y las herencias del pasado.

Una limitante explicativa fundamental del avance del proceso de democratización política, iniciado en 1979, lo ha constituido el fenómeno de la guerra. Creemos que una situación bélica prolongada adquiere una lógica propia, que implica la estructuración particular de las relaciones sociales y del mundo simbólico, alterando sensiblemente, en la práctica, el proyecto democrático socialista en procesos revolucionarios como el nicaragüense, que enfrentan la agresión imperialista ³.

Este fenómeno, definido a veces como la militarización de la sociedad política, repercute en las OP, ya que el involucramiento de estas organizaciones en la guerra, implica la priorización de las tareas bélicas sobre las actividades de promoción de los intereses de sus afiliados. También los métodos organizativos son permeados por la lógica militar de la conducción vertical y la disciplina estricta. Un resultado es la desertión de los miembros, al no responder dicha organización a sus objetivos originales, y al limitar la participación democrática y voluntaria de las bases. Surge, claramente, una contradicción entre la necesidad de impulsar el apoyo de las organizaciones populares a la guerra y la necesidad de que dichas organizaciones mantengan su carácter voluntario y respondan a los intereses inmediatos de sus bases.

La absorción de recursos por la guerra significa una incapacidad de satisfacer adecuadamente las necesidades materiales de la población, en particular de los grupos de menores ingresos. Esta penuria se suma al sobreesfuerzo demandado en su trabajo, para conformar - a veces - una actitud de rechazo al conflicto bélico. Estos determinantes económicos afectan negativamente la participación en las OP, ya que no pueden reemplazarse por una alta dosis ideológica, cuando está en juego la insatisfacción de necesidades básicas, como la alimentación, el vestuario o la habitación.

Por otro lado, en las guerras de liberación nacional como la de Nicaragua, se observa la necesidad de establecer un frente amplio antiimperialista, tanto por razones internas (sumar fuerzas contra el enemigo extranjero), como por razones de política internacional (ganar solidaridad y apoyo). Sin embargo, el deterioro de la situación económica de los sectores de menores recursos lleva a cuestionar esa unidad amplia, con el fin de repartir equitativamente los escasos bienes existentes.

El discurso político va dirigido al reclutamiento y a consolidar la unidad interna de cada bando. Se establece un discurso discotómico simple, que trata de convencer sobre la justeza de la posición propia y de desacreditar la del adversario. Las con-

diciones de existencia del debate político-ideológico desaparecen, al recurrirse al uso de la violencia física en respuesta a un adversario. Se tiende a desconocer la autonomía relativa del campo ideológico y la complejidad de su dinámica, interpretando cualquier discrepancia como una manipulación del enemigo.

Creemos que otro factor explicativo de las limitaciones encontradas en la participación popular consiste en la reproducción de relaciones sociales de subordinación generadas en el sistema anterior.

Si bien el régimen somocista reposaba, en última instancia, sobre la coerción, existía también una considerable hegemonía de las clases dominantes, materializada a través de un tejido de relaciones sociales de carácter «patronalista» o «clientelista». Estas relaciones de subordinación, propias de sociedades rurales, se establecen entre los sectores dominantes y los sectores dominados, mediante ciertas normas sobre derechos y deberes recíprocos, que se materializan a través del intercambio de bienes materiales y simbólicos. La dominación aparece en estas relaciones oculta tras una vinculación personal y afectiva, por ej., compadrazgo, amiguismo, protectorado. Estos elementos se han mantenido internalizados en el modelo cultural tradicional predominante, tanto en sectores rurales como urbanos, y ahí están a fines de la primera década revolucionaria.

Igualmente sucede en otros ámbitos de la sociedad política y civil variando en cada caso las argumentaciones sobre la necesidad de tal subordinación: unos dirigentes políticos consideran que sólo ellos poseen la «ideología revolucionaria» y la capacidad de conducción; unos burgueses o pequeños burgueses creen que sólo ellos tienen la capacidad de gestión empresarial para desarrollar las fuerzas productivas; unos jerarcas eclesiásticos piensan que sólo ellos poseen el don de interpretar la doctrina religiosa y representar a Dios; unos machos consideran que sólo los varones tienen la capacidad intelectual y física para dirigir, y así sucesivamente...

Es erróneo ver la reproducción de estas relaciones como el resultado consciente y planificado de los grupos dominantes, ya que constituye un proceso estructural, en el cual los sectores dominados contribuyen igualmente a su continuación. Las actitudes en los sectores populares de yoquepierdismo, pereza y pasividad, asociadas con un menosprecio de las propias capacidades y con concepciones fatalistas y mágicas de la realidad social, sirven para reproducir esas relaciones de subordinación. Por ejemplo, en muchos casos la participación política en las OP es vista como una carga indeseable, frente a otras opciones más atractivas como el descanso, el deporte, el licor o las fiestas.

La cuestión de la participación popular se vincula directamente con el tipo de sistema político que impulsa la revolución sandinista, en su transición al socialismo. El proyecto del FSLN ha planteado la construcción de un sistema democrático y pluralista, que combine de forma original el modelo representativo con el participativo. Del primero se ha retomado el sistema de partidos políticos, que pueden competir libremente por el sufragio de los ciudadanos en elecciones periódicas. Mientras que el modelo participativo se encontraría en la gestión directa del pueblo en los asuntos colectivos que le conciernen, tarea en la cual las OP desempeñarían un papel fundamental. De este modo, se tratarían de superar las limitaciones, tanto de la llamada «democracia formal o liberal», como de la llamada «democracia real o socialista».

Desde una perspectiva de izquierda, Nicaragua se encuentra en un proceso político renovador, similar al existente en el bloque socialista, pero compartiendo también sus limitantes: el menosprecio de la democracia política identificada con las sociedades capitalistas, la carencia de modelos democráticos de transición al socialismo, la concepción leninista del partido, que subordina a las OP como «instrumentos del poder», la postulación de la democracia como una etapa posterior al desarrollo de las fuerzas productivas y al cambio de relaciones de producción.

Un aspecto relevante es que se ha limitado la cuestión democrática al ámbito de la sociedad política, cuando la experiencia histórica ha mostrado que la reproducción de relaciones verticales en la sociedad civil (trabajo, escuela, familia), en los procesos de transición al socialismo ha contrarrestado los intentos de democratizar el aparato estatal o partidario. Es necesario ampliar la concepción de democracia a todos los ámbitos de la vida social, definiéndola como un tipo de relación social donde existe una participación igualitaria de los actores en las decisiones que los afectan. En esta tarea de construir nuevas relaciones sociales a todo nivel, las OP juegan un papel insustituible, porque atraviesan la frontera entre sociedad política y sociedad civil, y poseen una amplitud que abarca a todos los sectores populares.

Las próximas elecciones de febrero 1990 han abierto nuevamente el espacio para que los 21 partidos políticos nicaragüenses existentes inicien su campaña propagandística con miras a reclutar votos. Mi opinión es que, en este proceso, la participación popular no va a trascender a la de un simple consumidor de promesas electorales y la emisión de un voto.

Para las organizaciones populares sandinistas va a ser difícil mantener su carácter pluralista y su gestión de intereses sectoriales, sin ser absorbidos por la contienda electoral, en la promoción del FSLN.

Creo que el proceso más relevante para la participación popular hay que observarlo en los barrios, las empresas, las escuelas, y en todos los ámbitos de la vida colectiva. Es ahí donde se construye en Nicaragua una democracia real, donde el pueblo participa en igualdad de derechos y deberes, en las decisiones y en las acciones que afectan su vida social.

La libertad de expresión y organización es una realidad palpable en la Nicaragua de hoy. Este nivel de participación popular es generalizado, la gente opina, critica, es informada de las políticas de gobierno y puede organizarse para satisfacer sus distintos intereses. Igualmente, existe la participación representativa, propia de la democracia formal, a través de sus delegados elegidos para los puestos de gobierno, en 1984 y en 1990. Sin embargo, el desarrollo de una participación activa, consciente y masiva en la autogestión de los intereses populares, es un reto pendiente al futuro.

Referencias

*Anónimo, BARRICADA - PRENSA. 27/03 - 1989;

*Anónimo, CUADERNOS DE SOCIOLOGIA. 7 - Managua, Nicaragua, UCA. 1989.